



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diez (10) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE:	FREDY ALONSO ECHEVERRI GUTIERREZ, BEATRIZ ELENA CEBALLOS OSORIO, LAURA CATHERINE ECHEVERRI CEBALLOS, SOFIA ELENA LONDOÑO ECHEVERRI Y MARLEY NATALIA ECHEVERRI CEBALLOS.
DEMANDADAS:	NOMADA Y CIA SAS, REINELA DEL CARMEN ECHEVERRI GUTIERREZ, MICHAEL SCHULZE FROHLICH ECHEVERRI, UNIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A, E INDUSTRIAS SPRING S.A.S.
LLAMADO EN GARANTÍA:	COMPAÑIA SURAMERICANA SEGUROS S.A
TIPO DE PROCESO:	ORDINARIO LABORAL.
DECISIÓN:	CONFIRMA

En la fecha, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, se reunió para resolver el Recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la Parte demandante, en el Proceso Ordinario Laboral adelantado por el Señor **FREDY ALONSO ECHEVERRI GUTIERREZ y Otros** en contra de la Sociedad **NOMADA Y CIA SAS, y Otros**, frente a la decisión adoptada por el Juzgado de instancia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN ESTA INSTANCIA:

UNIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A: Solicita se confirme la decisión de Instancia, toda vez que la solicitud de pruebas debe efectuarse en el momento procesal oportuno, y en el caso específico de la demandante, con la presentación de la demanda o en la reforma a ésta. Que dicha Parte pretende revivir una etapa procesal que ya se encuentra precluida, con la que busca bajo una nueva solicitud incorporar elementos materiales probatorios, aún cuando su etapa ya finalizó. Y que las pruebas oficiosas las puede decretar el Juzgado con el fin de aclarar y dilucidar algunas situaciones, pero no a petición de Parte.

La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la Ponente, el cual se traduce en la siguiente decisión:

ANTECEDENTES:

2

El actor presentó demanda ordinaria laboral procurando el reconocimiento y pago de daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, padecidos con ocasión del accidente de trabajo acaecido por culpa patronal, estando el Señor Fredy Alonso Echeverri Gutiérrez al servicio de la Sociedad Nómada y CIA SAS (anexo 01).

Una vez finalizada la etapa de Decreto de Pruebas celebrada por el Juzgado de conocimiento el 03 de noviembre de 2022, el apoderado de la Parte demandante realizó 2 peticiones: 1) que se omitiera el interrogatorio de parte al actor, dado su estado de discapacidad, y 2) Que de manera oficiosa se realizara una nueva valoración de PCL.

El Juzgado de conocimiento negó dichas peticiones en los siguientes términos:

1) Que de conformidad con la Ley 1996 de 2019 se presume la capacidad legal de las personas con algún tipo de discapacidad, y ante algún inconveniente en su declaración se debe pedir apoyo a la Jurisdicción de Familia; lo cual significa que el decreto y práctica del interrogatorio es pertinente; y 2) que no es procedente la solicitud de nueva prueba, en la medida que dicha etapa procesal se encuentra precluida, ora con la presentación de la demanda o con la reforma a la misma. Que el Principio de oficiosidad de la prueba es un deber o potestad del Despacho no de las Partes; y que en el presente caso, con la prueba obrante al interior del Proceso puede decidir de fondo.

Inconforme con esa decisión, la Parte demandante interpuso **Recurso de APELACIÓN:**

Dice que la prueba oficiosa es un deber judicial y es un derecho que tiene la Parte, porque se deben tener en cuenta los hechos nuevos en aras de garantizar al trabajador el debido proceso, el derecho de defensa, el acceso a la administración de justicia y el Principio de legalidad, razón por la cual no se puede negar la práctica de una prueba indispensable, necesaria y útil al interior del Proceso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA.

- **Competencia:** Principio Consonancia art. 66A del C.P.T. y S.S, adicionado, art 35 de la L. 712 de 2001.
- **Objeto:** Determinar si en el caso a estudio, es o no procedente decretar como prueba de oficio la realización de una nueva valoración o dictamen de PCL al actor, solicitada por su apoderado judicial en la Audiencia de trámite. Veamos:

PRUEBAS – OPORTUNIDAD PROCESAL PARA APORTARLAS o PEDIRLAS.

El artículo 25 del C.P.T y de la S.S. establece las formalidades que debe cumplir el escrito de demanda, señalando que la misma contendrá, entre otras, “la petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba”; y consagrándose en el artículo 26 ibídem, que la demanda deberá ir acompañada de “las pruebas documentales y las anticipadas que se encuentren en poder del demandante...”.

3

Ahora, el artículo 60 del referido Estatuto procesal, establece:

“Análisis de las pruebas. El Juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo.”.

Y el artículo 173 del C.G.P. –aplicable por analogía al Proceso laboral, en virtud de lo dispuesto en el Art. 145 C.P.T. y de la S.S.-, indica que para que las pruebas puedan ser apreciadas por el Juez, las mismas deben solicitarse e incorporarse al Proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para el efecto. Así:

“Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.

En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente...”.

Sobre este puntual tema de aportación de pruebas en tiempo y en legal forma, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en SL 3568 del 18 de agosto de 2021, Rad. N° 71475, M.P: Gerardo Botero Zuluaga, reiteró el criterio sostenido desde la Sentencia del 30 de marzo de 2006, Rad. 26.336, M.P. Luis Javier Osorio López, así:

“..... importa destacar que una prueba es inexistente o más bien inoponible en la medida que no sea debidamente incorporada al proceso, esto es, de manera regular y en tiempo, dado que no basta con que una de las partes en forma desprevenida o extemporánea la hubiera allegado y que como consecuencia de ello obre en el expediente, para que el juzgador pueda válidamente considerarla e impartirle valor probatorio al momento de proferir la decisión de fondo, pues en estos casos se requiere del pronunciamiento previo del juez de conocimiento en relación a su aportación, a efecto de cumplir con los citados principios y por ende con el debido proceso al tenor del artículo 29 de la carta mayor.

Lo dicho significa, que no es viable la apreciación de una prueba inoportunamente allegada y menos que no hubiese sido decretada como tal en alguna de las etapas procesales prescritas para esos específicos fines, puesto que permitirlo, sería ir en contra del mandato de la mencionada norma constitucional que señala como nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

Así las cosas, los Jueces estamos obligados por Ley a analizar las pruebas regular y oportunamente allegadas al Proceso, esto es, dentro de las etapas procesales correspondientes, que en el caso del demandante, por regla general es la presentación de la demanda, o en la reforma a la misma en los términos del Artículo 28 del C.P.T. y de la

S.S., el cual le brinda a la Parte actora la posibilidad de reformarla por una sola vez, dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término del traslado.

En el caso de autos, pretende el demandante se decrete de oficio la realización de una nueva valoración o dictamen de PCL, solicitud que solo vino a ser presentada al cierre de la Audiencia de trámite, específicamente en la etapa de decreto de pruebas, esto es, en fecha posterior a la de la presentación de la demanda, por lo cual como bien lo dedujo la A quo, no es procedente, máxime que dicha solicitud pudo ser objeto de reforma a la demanda dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término del traslado de la misma, pero no fue así, dejando dicha Parte pasar las oportunidades procesales con las que contaba para incorporar pruebas al Proceso. Es por ello que tal prueba no fue decretada en la oportunidad procesal prevista para ello, esto es, en la Audiencia de Conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas realizada el 03 de noviembre de 2022 –anexo 79 y 80 del expediente digital.-.

Así las cosas, se **CONFIRMARÁ** la decisión de instancia al respecto.

Lo anterior no obsta para que si la Juez de instancia considera más adelante necesario la realización de una nueva valoración o dictamen de PCL, lo haga en aras de establecer la verdad real al momento de resolver el asunto puesto a su consideración.

Las Costas Procesales de Segunda Instancia estarán a cargo del demandante vencido en el Recurso interpuesto y a favor de las demandadas. Las Agencias en derecho se fijan en la suma de 1 SMLMV, distribuido por iguales partes en favor de estas últimas.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

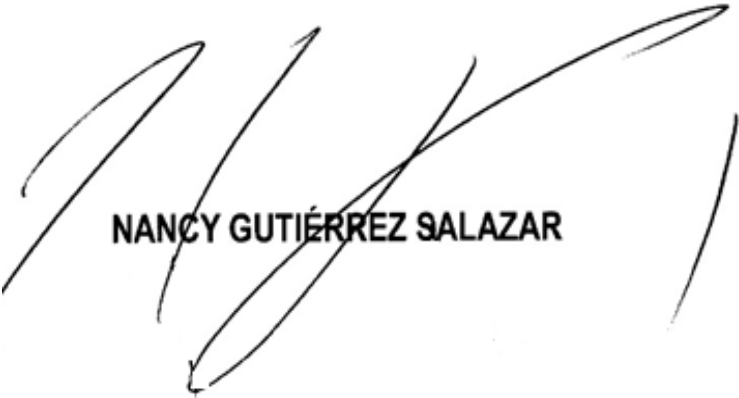
RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí el 03 de noviembre de 2022, en el Proceso Ordinario Laboral promovido el Señor **FREDY ALONSO ECHEVERRI GUTIERREZ, BEATRIZ ELENA CEBALLOS OSORIO, LAURA CATHERINE ECHEVERRI CEBALLOS, SOFIA ELENA LONDOÑO ECHEVERRI Y MARLEY NATALIA ECHEVERRI CEBALLOS**, en contra de la Sociedad **NOMADA Y CIA SAS, REINELA DEL CARMEN ECHEVERRI GUTIERREZ, MICHAEL SCHULZE FROHLICH ECHEVERRI, UNIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A e INDUSTRIAS SPRING S.A.S**, según las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Las Costas Procesales de Segunda Instancia están a cargo del demandante y a favor de las demandadas. Las Agencias en derecho se fijan en la suma de 1 SMLMV, distribuido por iguales partes en favor de estas últimas.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** electrónicos, de que trata la ley 2213 del 13 de junio de 2022 y se firma en constancia.

Las Magistradas,



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE
MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó
por estados N°23 de 13/02/2023.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>